



PODER JUDICIAL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO  
**JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO: 1016/2020**  
**SENTENCIA DEFINITIVA**

**JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**NÚMERO: 1016/2020**

**ACTOR: \*\*\***

**AUTORIDADES DEMANDADAS:** 1)  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS y 2)  
JUEZ MUNICIPAL ADSCRITO A LA  
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL, ambas  
del MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Aguascalientes, **doce de febrero de dos mil veintiuno.**

**VISTOS** para resolver en definitiva los autos del juicio de nulidad número **1016/2020**, y,

**RESULTANDO**

I. Mediante escrito presentado en Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado el **diecinueve de junio de dos mil veinte**, remitido ese mismo día a esta Sala **\*\*\***, demandó de la Secretaría de Finanzas Públicas y Juez Municipal adscrito a la Dirección de Justicia, ambas del Municipio de Aguascalientes, la nulidad del acto administrativo por el cual se admitió la demanda y que se hace consistir en la imputación de conducir vehículo en estado de ebriedad, así como los pagos realizados en consecuencia de la misma.

II. Previo requerimiento, por auto de fecha **ocho de julio de dos mil veinte**, se admitió a trámite la demanda de nulidad, se recibieron las pruebas ofrecidas, y se ordenó el empazamiento respectivo a las autoridades demandadas.

III. El **trece de agosto de dos mil veinte**, se tuvo a las autoridades demandadas Secretaría de Finanzas Públicas y Juez Municipal adscrito a la Dirección de Justicia, ambas del Municipio de Aguascalientes contestando la demanda interpuesta en su contra; se recibieron las pruebas que ofrecieron y se ordenó

correr traslado a la parte actora para que formulara ampliación de la demanda.

IV. Por auto de fecha *diecisiete de noviembre de dos mil veinte*, se declaró perdido el derecho a la parte actora para formular ampliación de la demanda, y se señaló fecha para la audiencia de juicio.

V. En audiencia de juicio celebrada el *nueve de febrero de dos mil veintiuno*, se desahogaron las pruebas que fueron admitidas a las partes; posteriormente se pasó al periodo de alegatos, y se citó el asunto para sentencia definitiva; la que hoy se dicta bajo los siguientes:

### CONSIDERANDOS

**PRIMERO.** Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 51, párrafo segundo, y 52, último párrafo, de la Constitución Local; 33 A y 33 F, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 1, primer párrafo, 2, fracción I, y 59 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, toda vez que se impugna un acto administrativo emitido por autoridades del *Municipio de Aguascalientes*, que el particular afirma le afecta en su esfera jurídica.

**SEGUNDO.** La existencia de la resolución impugnada se acredita con el original de la Determinación de Situación Jurídica de Infractor con número de folio **28332**, emitida por el Juez Municipal adscrito a la Dirección de Justicia del Municipio de Aguascalientes el *tres de mayo de dos mil veinte*, visible a fojas **53 a la 55** de los autos.

Probanza que al provenir de las partes, y al tratarse de una documental pública, merece valor probatorio pleno, conforme al artículo 341 del Código de Procedimientos Civiles del



Estado de Aguascalientes, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, según su numeral 47.

**TERCERO.** Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, último párrafo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, se procede al estudio de las causales de improcedencia opuestas por las autoridades demandadas, previstas en el artículo 26, fracción IV y VI, del ordenamiento legal antes invocado, ya que de resultar procedentes, provocarían el sobreseimiento del presente juicio, impidiendo el análisis de los conceptos de nulidad expresados por el demandante.

En primer lugar, señalan las autoridades demandadas que debe sobreseerse el juicio toda vez que el accionante consintió el acto al efectuar el pago de la multa generada por la infracción de tránsito que se hizo acreedor.

Causal que es INFUNDADA, puesto que el hecho de que se hubiere cubierto por la parte actora el importe del impuesto, no significa consentimiento de su parte, por el contrario, al haber presentado su demanda, una vez que tuvo conocimiento del adeudo, dentro del término previsto por el artículo 28, párrafo segundo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, es decir, dentro de los quince días posteriores a la fecha en que enteró el pago, suponiendo que éste se realizó bajo protesta conforme al artículo 48, fracción III, del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes que a la letra dice:

**“Artículo 48.-** Los contribuyentes tendrán derecho a hacer el pago de créditos fiscales bajo protesta, cuando se propongan interponer recursos o medios de defensa.

*El pago así efectuado, no implica consentimiento con la resolución o disposición a que se dio cumplimiento, pero extingue el crédito fiscal.*

**El pago bajo protesta, se acreditará en cualquiera de las siguientes formas:**

*L.*  
**III.- Dentro del término que establezcan las leyes se intentará los recursos o medios de defensa que procedan, en caso contrario, el pago se tendrá como definitivo...**

Luego, al haber intentado el Juicio Contencioso Administrativo, dentro de los quince días siguientes al de su notificación, establecido en el artículo 28 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, es una forma de acreditar el pago bajo protesta, es decir, la demanda de nulidad implica la protesta del pago realizado, sin que pueda significar que la parte actora consintió el pago, ya que en el supuesto, solo podría ocurrir en el caso de que la parte actora no hubiere ocurrido a impugnar el crédito fiscal oportunamente, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia invocada por las demandadas.

Al efecto es aplicable la tesis de la séptima época, sostenida por los tribunales colegiados de circuito, publicada en la página 187 de Semanario Judicial de la Federación, tomo 145-150 Sexta Parte, cuyo rubro y texto dicen:

**"PAGO DE UN CRÉDITO FISCAL SIN LA EXPRESIÓN "BAJO PROTESTA", NO SIGNIFICA SU CONSENTIMIENTO, SI SE OCURRIÓ AL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO.**

*Aun cuando la quejosa haya pagado el crédito fiscal a su cargo sin reserva alguna, en otras palabras, sin la expresión "bajo protesta", eso no significa que hubiera consentido el pago ni la fuente que le dio origen, porque habiendo pagado y ocurrido al juicio ante el tribunal administrativo mencionado, dentro del término establecido en el ordenamiento legal que lo regula, a pesar de que formalmente no se hubiera probado que el pago se hizo "bajo protesta", ese pago no entraña consentimiento del acto combatido. Pretender lo contrario, sería tanto como exigir una formalidad, o más aún una solemnidad, incompatible con el derecho moderno que trata de proteger intereses o derechos legítimos aun cuando no se hayan observado formalidades o solemnidades estas últimas ya excluidas del derecho y las primeras, cuando existen, no son para perjuicio del interesado, sino en beneficio del mismo, a quien el cumplimiento de las formalidades le advierte y salvaguarda de las consecuencias perjudiciales derivadas de la realización de actos sin su observancia."*



De igual forma es aplicable la tesis de la séptima época, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 202 Semanario Judicial de la Federación, tomo 175-180, Primera Parte, cuyo rubro y texto dicen:

**“PAGO BAJO PROTESTA. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA EL QUE ESTE NO SE DEMUESTRE.**

*No es causa de improcedencia el hecho de que no se demuestre al juez que el pago del impuesto se haya hecho bajo protesta y menos que el pago liso y llano del impuesto deba presumirse como acto consentido de manera expresa, independientemente de que el mismo (impuesto y su pago) haya sido impugnado dentro de los quince días siguientes; pues el intentar la demanda de amparo dentro de los quince días siguientes al acto de aplicación del mencionado impuesto, refleja no estar la quejosa de acuerdo y mucho menos consentir en causar y pagar el impuesto, máxime, si dicho pago lo efectuó sólo para no incurrir en posible conducta infractora.”*

Por otra parte argumentan que no procede la nulidad lisa y llana que pretende el accionante debido a que en todo momento el infractor menciona que se le aplicó la Ley de Vialidad, misma que se encuentra derogada desde el *treinta de abril de dos mil dieciocho*, entrando en vigor la Ley de Movilidad para el Estado de Aguascalientes, por lo cual resulta improcedente todo lo vertido en la demanda inicial y debe ser sobreseído.

Asimismo, argumentan que, resultan improcedentes las manifestaciones vertidas por la parte actora en su escrito inicial de demanda, y que por tal motivo deberá de ser improcedente y sobreseído el presente asunto, de acuerdo a los artículos 26 fracción VI, y 27 fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.

Lo anterior, es INATENDIBLE toda vez que esos argumentos no se encuentran previstos en las causales de improcedencia que establece el artículo 26 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de

Aguascalientes, ni mucho menos en la fracción VI que menciona, ya que dicho artículo y fracción señalan lo siguiente:

**“ARTÍCULO 26.-** *Es improcedente el juicio ante la Sala, contra los actos:*

**I.-** *Que no afecten los intereses legítimos del demandante;*

**II.-** *Cuya impugnación no corresponda conocer a dicha Sala;*

**III.-** *Que hayan sido materia de sentencia de fondo emitida por la Sala siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas;*

**IV.-** *Respecto de los cuales hubiera consentimiento expreso o tácito, entendiéndose que hay consentimiento tácito, cuando no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas, o juicio ante la Sala, en los plazos que señala esta ley.*

**V.-** *Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución, ante autoridad administrativa estatal, municipal, sus organismos descentralizados, o ante la propia Sala.*

**VI.-** *De cuyas constancias de autos apareciera, de manera clara, que no existe la resolución o el acto impugnado;*

**VII.-** *Respecto de los cuales hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo;*  
y

**VIII.-** *Que hayan sido materia de resolución en un procedimiento judicial.”*

De ahí que no se decrete el sobreseimiento del presente juicio como lo solicitan las autoridades demandadas.

**CUARTO.** Al no actualizarse las causales de improcedencia invocadas por las autoridades demandadas, y al no advertir de oficio alguna por parte de esta autoridad jurisdiccional, se procede a analizar los conceptos de nulidad expresados por la parte actora; mismos que no se reproducen en obvio de repeticiones; sin que se haga necesaria su transcripción por no ser un requisito formal de las sentencias.<sup>1</sup>

Del mismo modo, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por las autoridades demandadas; sin que puedan ser tomados en cuenta

<sup>1</sup> Al respecto véase la **Tesis: 2a./J. 58/2010**, de la Novena Época, registro: 164618 (SJF), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro señala: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.”**



los motivos y fundamentos legales para la emisión del acto impugnado que no hayan sido invocados en éste, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37<sup>2</sup> de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes.

#### **QUINTO ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD.**

Se procede a estudiar el “PRIMER” concepto de nulidad que hizo valer la parte actora en su escrito inicial de demanda, en el cual manifiesta en esencia, que se violó en su perjuicio lo establecido en el artículo 145 Bis de la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes, en lo referente a que los agentes de tránsito deberán levantar acta circunstanciada firmada por dos testigos, manifestando que jamás le fue otorgado ese derecho para realizar la designación de los mismos, transgrediendo así, también el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como garantía de seguridad jurídica de todo gobernado.

Dicho argumento es **FUNDADO**

Ahora bien, y en atención a que las autoridades demandadas fundan su actuar en el artículo 292 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, y el accionante manifiesta que se violó en su perjuicio el artículo 145 BIS de la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes *-Ley abrogada el treinta de abril de dos mil dieciocho-*, y como consecuencia de ello, el accionante formula conceptos de nulidad desvirtuando el actuar de la autoridad, argumentando violaciones a lo establecido en el artículo mencionado en líneas que anteceden, es necesario establecer que tanto el citado numeral como el artículo 292, penúltimo y último párrafo de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes *—Ley vigente desde el uno de mayo de dos mil*

---

<sup>2</sup>“ARTICULO 37.- En la contestación de la demanda, no podrá cambiarse ni la motivación ni los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.

dieciocho—, que son idénticos en su contenido, como a continuación se demuestra:

### **Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes**

**“ARTÍCULO 145 BIS.-** Los agentes podrán detener la marcha de un vehículo cuando se lleven a cabo operativos preventivos de conducción de vehículos, en estado de ebriedad u otras sustancias tóxicas.

...

En caso de actualizarse alguno de los supuestos contenidos en el párrafo quinto o noveno del presente Artículo, **los agentes deberán levantar acta circunstanciada firmada por dos testigos propuestos por el conductor del vehículo o ante su negativa nombrados por los propios agentes**, de la cual, se entregará una copia al conductor.

Ninguna persona deberá conducir vehículos por la vía pública, si tiene una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 miligramos por litro, en aire espirado, superior a 0.4 miligramos por litro o bajo el influjo de cualquier tipo de estupefaciente.”

### **Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes**

**“ARTÍCULO 292.-** Los agentes podrán detener la marcha de un vehículo cuando se lleven a cabo operativos preventivos de conducción de vehículos en estado de ebriedad u otras sustancias tóxicas.

...

En caso de actualizarse alguno de los supuestos contenidos en el párrafo quinto u octavo del presente Artículo, **los agentes deberán levantar acta circunstanciada firmada por dos testigos propuestos por el conductor del vehículo o ante su negativa nombrados por los propios agentes**, de la cual, se entregará una copia al conductor.

Ninguna persona deberá conducir vehículos por la vía pública, si tiene una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 miligramos por litro; en aire espirado, superior a 0.4 miligramos por litro o bajo el influjo de cualquier tipo de estupefaciente.”

De ambos numerales, se obtiene en primer término, una disposición prohibitiva dirigida a los conductores de vehículos en la vía pública, al prever en su último párrafo que ninguna persona debe conducir vehículos por la vía pública, si tiene una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 miligramos por litro, en aire espirado, superior a 0.4 miligramos por litro o bajo el influjo de cualquier tipo de estupefaciente; lo que implica que para que el presunto infractor encuadre en dicha hipótesis normativa,





es necesario que esté fehacientemente acreditado que dicho infractor conducía un vehículo en estado de ebriedad.

Ahora, para acreditar el estado de ebriedad de un conductor, entre otros requisitos, el agente de tránsito deberá levantar acta de infracción debidamente circunstanciada, es decir, asentar de manera pormenorizada los hechos ocurridos en el momento de la diligencia; esto, porque la naturaleza de toda acta circunstanciada consiste en constituir constancias completas y fehacientes de los hechos a que se refieren.

En la especie, en la segunda hoja del acta de infracción por conducir vehículos en estado de ebriedad u otras sustancias tóxicas número **5429** -origen del procedimiento sancionador que nos ocupa, visible a fojas **57 y 58** de autos-, se advierte literalmente:

*“Asimismo, se le **hace saber** en este acto el/la C. **\*\*\***, que con fundamento en el artículo 292 de la Ley de Movilidad del Estado es su derecho firmar el acta así como a nombrar a dos testigos para que se estampen su firma en ella, así como que ante su negativa serán los propios oficiales quienes los nombren, por lo que en este momento se procede a que el/la conductor/a del vehículo cuyas características han sido descritas en líneas anteriores firme la presente Acta Circunstanciada y designe a dos testigos en uso de la facultad conferida por el dispositivo legal antes citado, manifestando que: **NO CUENTA CON TESTIGOS**, por lo que se procede a nombrar como testigos a los/as C. C. **\*\*\***,...”*

Sin bien es cierto, se le hizo saber al presunto infractor **\*\*\***, el derecho que le asiste tanto para firmar el acta circunstanciada, como para nombrar a dos testigos; sin embargo, del acta de infracción no se advierte con exactitud si los designó o se abstuvo de designarlos o quien hizo la designación; ya que en el caso concreto, se asentaron las palabras “**NO CUENTA CON TESTIGOS**”, lo que constituye una irregularidad, pues para la satisfacción del requisito previsto en el penúltimo párrafo del artículo 292 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, así como en el artículo 16 de la Carta Magna, debe constar de manera precisa dicha circunstancia en la referida acta de infracción.

Cabe señalar que lo correspondiente a la designación de los testigos debe hacerse constar en el momento mismo de la diligencia, no teniendo validez el formato pre elaborado por el agente de tránsito, ya que no es válido suponer que en todos los casos el conductor del vehículo designará los testigos, y en el formato preestablecido se da por hecho que quien designa a los testigos es el infractor, lo cual no es válido, pues dicha circunstancia solo se podrá conocer una vez que el agente le haga saber ese derecho de nombrar a los testigos al conductor del vehículo y que este último decida si los nombra o se niega a nombrarlos y no antes.

Así, en la especie, no existe claridad si el presunto infractor hizo la designación, puesto que no se asienta textualmente que nombra a los testigos o que se negó a nombrarlos, pues la frase **“NO CUENTA CON TESTIGOS”** puede interpretarse como si lo hubiera dicho el infractor, o bien, como realizada por el agente de tránsito quien en tercera persona establece que “NO CUENTA CON TESTIGOS”.

Pues el formato preestablecido da pauta a esa imprecisión, no acreditándose a plenitud que **el actor** expresó su voluntad de no designar testigos, para que plenamente se actualizara la posibilidad de que el agente de tránsito legamente nombrara a los testigos.

En efecto, de un análisis lógico jurídico la expresión *“...manifestando que: **NO CUENTA CON TESTIGOS** por lo que se procede a nombrar como testigos a los C. C.     ”* [Lo subrayado es lo asentado a mano en el momento de la diligencia por el agente de tránsito y lo no subrayado es lo preestablecido en el formato o machote utilizado por la autoridad]; es una expresión muy vaga e imprecisa, de la que también es factible deducir que fue el oficial de tránsito quien nombró a los testigos, sin que se advierta que **el conductor** del vehículo se hubiere negado a nombrarlos; en consecuencia de ello, existe



incertidumbre respecto de dichos hechos y por tanto, se deja en estado de indefensión a la parte actora.

Sirve de apoyo lo previsto en la jurisprudencia, con número de registro 255843, de la séptima época, emitida por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 131 que a la letra señala:

**“VISITAS DOMICILIARIAS. TESTIGOS.** Para satisfacer el requisito de artículo 16 constitucional, **es menester** que en las actas de las visitas domiciliarias **se asiente que se requirió** para que hiciera la designación y que, asimismo, **se asiente si se negó a hacerlo**, y **si los testigos que intervinieron fueron nombrados por aquél, o por la autoridad en su negativa, pero sin que baste que se diga simplemente en el machote en que se levantó el acta que se le hizo la prevención relativa, sin precisar si se abstuvo de designarlos y ni quién hizo la designación, pues la satisfacción del requisito constitucional indicado debe constar de manera precisa en las actas de las visitas domiciliarias, sin que sea lícito pretender satisfacerlo a base de inferencias.**”

En otras palabras, no se cumplió con el requisito previsto por el artículo 292 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, en el sentido de que en caso de actualizarse alguno de los supuestos contenidos en el párrafo quinto o noveno de dicho precepto, **los agentes deberán levantar acta circunstanciada firmada por dos testigos propuestos por el conductor del vehículo o ante su negativa nombrados por los propios agentes**, de la cual, se entregará una copia al conductor.

De modo que, no es suficiente que el agente de tránsito en el acta de infracción, haga referencia a que se le hizo saber al presunto infractor el derecho que le asiste para nombrar a dos testigos, para tener por acreditado los hechos que se le imputan al infractor, pues al no existir precisión en la circunstanciación en el sentido de que fue el propio infractor el que nombra a los testigos o ante su negativa fue el agente de tránsito quien hizo tal designación, lo asentado en el acta de infracción es insuficiente para acreditar que el actor tuvo la oportunidad de nombrar a los testigos, por lo que el acta de

infracción por conducir vehículos en estado de ebriedad u otras sustancias tóxicas, con número de folio **5429** [visible a fojas **57 y 58 de los** autos], carece de eficacia para acreditar dicha circunstancia, contraviniéndose lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 292 de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes.

Finalmente, si bien el incumplimiento a las formalidades que deben revestir al acto administrativo, se traduce en un vicio del procedimiento, y de declararse la nulidad del acto, esta sería una nulidad para el efecto de que se repusiera dicho procedimiento viciado, lo cierto es que en el presente caso no es posible, dado que por la naturaleza del acto, es imposible reproducir con certeza las circunstancias que se presentaron en el momento en que se levantó el acta de infracción, de la cual con posterioridad derivó la determinación de situación jurídica de infractor, por la que se impuso al actor la sanción de multa ahora impugnada, por ello, la autoridad debió satisfacer los requisitos necesarios para la validez del acta de infracción en el momento de su realización.

Sirve de apoyo a este razonamiento, el criterio jurisprudencial sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que dice:

**“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NULIDAD LISA Y LLANA CUANDO SE INCUMPLEN LOS REQUISITOS FORMALES EN LA EJECUCIÓN DE LA VISITA.** Si bien es cierto que el incumplimiento de las formalidades que consagra la fracción III del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, en relación con la identificación de los visitadores, **son vicios habidos durante la secuela del procedimiento de fiscalización, también lo es que tales vicios de ninguna manera son susceptibles de reparación dentro de ese procedimiento, dada la naturaleza del acto de que se trata, habida cuenta que los requisitos legales que debe cumplir tal acto para su validez se deben de satisfacer en el momento en que se realizan, por lo que es inconcuso que una nulidad para efectos, por el incumplimiento de las formalidades legales que nos ocupan, sería incongruente con la naturaleza del mismo, en virtud de la imposibilidad de realizarse en las mismas circunstancias en las que se llevó a cabo la ejecución de la orden de visita, precisamente por**



*Encontrarse viciado el procedimiento desde su origen, el cual ningún efecto puede producir, sino que, en todo caso, la satisfacción de los requisitos legales que establece el Código Fiscal de la Federación para la práctica de visitas (en el supuesto de que no se declare la nulidad de la orden de visita) sólo se podría dar en un nuevo procedimiento. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta que no toda violación formal dentro de un procedimiento administrativo trae como consecuencia ineludible el que se declare la nulidad para el efecto de que se reparen los actos viciados y se emita uno nuevo purgando tales vicios, sino que es menester considerar la formalidad que para la legalidad del acto establece la ley, en relación con la naturaleza propia del acto y las circunstancias en las que se llevó a cabo, para determinar si la formalidad trasciende a la legalidad interna del acto (lo que impide que se decrete la nulidad para efectos), o si la violación a la formalidad no tiene que ver con el fondo mismo del acto (supuesto en el cual sí es posible señalar efectos al anularlo), es decir, **hay que establecer si la formalidad, por la índole del acto constituye un requisito intrínseco, no sólo de su existencia sino de su validez, a fin de precisar si admite efectos o si los mismos, por un principio de congruencia, resultan ser incompatibles con la naturaleza de la ilegalidad cometida en el acto de que se trate.** En tal virtud, si la garantía de seguridad jurídica que tutela el artículo 16 constitucional consiste, entre otros aspectos, en el cumplimiento de requisitos formales que establece la ley para la validez del acto, es innegable que para la validez de la ejecución de una orden de visita para determinar la situación fiscal del contribuyente, como se realiza en su domicilio y sobre sus papeles (bienes tutelados también por el artículo 16 constitucional), debe satisfacer escrupulosamente los requisitos tanto constitucionales como los que señala el Código Fiscal de la Federación, habida cuenta que el incumplimiento de la forma en que se debe llevar a cabo la ejecución de la orden de visita no puede producir válidamente ningún efecto legal, porque la violación cometida (falta de identificación correcta de los visitantes) es una violación sustancial, en cuanto a que la formalidad que se dejó de observar, por constituir un requisito esencial de la validez de la ejecución de la orden de visita, que tiene por objeto preservar una garantía de seguridad jurídica, necesariamente trasciende a la legalidad interna de dicha ejecución; por ende, la declaratoria de nulidad, en casos como el que nos ocupa, debe ser lisa y llana pues lo contrario equivaldría a darle un efecto inconsecuente con la naturaleza del acto cuya nulidad se determinó, propiciando con ello la inseguridad jurídica para los particulares, con evidente quebranto de la garantía que consagra el artículo 16 constitucional. Por tanto, a pesar de que la Sala del conocimiento declaró la nulidad de la resolución impugnada con apoyo en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, ello es insuficiente para modificar la sentencia a fin de que se señalen los efectos de la misma, pues la ilegalidad en que incurrió la demandada no admite efectos, por la naturaleza de los actos y por los vicios que a éstos se le atribuyeron; por lo que, tomando en consideración tanto la ilegalidad cometida por la autoridad administrativa, como lo dispuesto por el artículo 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, que señala que la sentencia definitiva podrá declarar la nulidad de la resolución impugnada,*

*debe concluirse que resulta correcto el que se hubiera omitido señalar para qué efectos se declaró la nulidad, ya que se trataba de una nulidad lisa y llana, que deja a la autoridad en aptitud, si lo considera conveniente, porque esa nulidad no restringe su imperio, de ejecutar la orden de visita, cuya legalidad no se vio afectada en uso de sus propias atribuciones, pero en un nuevo procedimiento.”*

Resuelto lo anterior, y toda vez que la referida acta de infracción por conducir vehículos en estado de ebriedad u otras sustancias tóxicas con número de folio **5429**, es el acto administrativo que da inicio al procedimiento administrativo sancionador, debe estimarse que la ilegalidad de dicha acta implica necesariamente la inexistencia de la base de tal procedimiento, por tanto, se declara la **nulidad lisa y llana** de la determinación de situación jurídica de infractor con número de folio **28332**, que derivó de aquella.

Al resultar fundado el concepto de nulidad en análisis, es suficiente para declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado.

**SEXTO.** Al resultar ilegal el acta de infracción, se actualiza la causal de anulación prevista en el artículo 61, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, por lo que de conformidad con lo previsto en el diverso numeral 62, fracción II, de ese mismo cuerpo de leyes, se declara **LA NULIDAD LISA Y LLANA** de la Determinación de Situación Jurídica de Infractor con número de folio **28332**, emitida por el Juez Municipal adscrito a la Dirección de Justicia Municipal el *tres de mayo de dos mil veinte*, visible a fojas **53 a la 55 de los autos**.

Además, como consecuencia de lo anterior y con fundamento en el artículo 63, primer párrafo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes<sup>3</sup>, deberá restituirse al actor en sus derechos que

<sup>3</sup> “**ARTÍCULO 63.-** En el caso de ser fundada la demanda y que la sentencia declare la nulidad de la resolución o acto, las autoridades demandadas quedarán obligadas a otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos que le hubieran sido desconocidos o afectados de manera indebida.”



le hubieran sido afectados con motivo de la sanción impuesta, cuya nulidad ha sido declarada; por tanto, **se ordena hacer la devolución de los pagos** que realizó **el actor** por las siguientes cantidades:

**1. \$4,344.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)** por concepto de **“MULTAS POR ALCOHOLÍMETRO”**, tal y como se acredita con la factura número de serie y folio **K0000304292**, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, visible a foja **23** de los autos.

**2. \$111.00 (CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.)** por concepto de **“PENSIÓN MUNICIPAL”**, tal y como se acredita con la factura número de serie y folio **K0000325175**, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, y que en original obra a foja **24** de los autos.

**3. \$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** por concepto de **ARRASTRE DE VEHÍCULO (GRÚA)**, tal y como se acredita con la nota de arrastre número **4302**, expedida por **“GRUAS FENIX”**, y que en original obra a foja **25** de los autos.

**Esto, porque dichas documentales se relacionan de manera directa con el acto cuya nulidad fue decretada, al provenir de su ejecución, al encontrarse administradas entre sí y coincidir con la fecha de emisión, por tanto, la manifestación y objeción planteada por las demandadas devienen improcedentes.**

Por lo que se deja a **disposición de la demandada Secretaría de Finanzas Públicas Municipales** las facturas pago y nota de arrastre, descritos en el párrafo anterior, para el efecto de que conforme al trámite legal que corresponda, gire sus instrucciones a fin de que se verifique la devolución de dichos importes al demandante.

Debiéndose **Inscribir en el Sistema Informático de la Dirección de Justicia Municipal**, el sentido de la presente resolución, especificando que no se acreditó la causa de la

detención, que dio lugar al ingreso o antecedente policiaco y como consecuencia de ello se anuló la multa por alcoholímetro impugnada, a fin de reparar los derechos que le fueron afectados al demandante.

Por las razones que se informan en el presente fallo, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, fracción II y 62, fracción II, y 63, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, se resuelve:

**PRIMERO.** Es procedente la acción ejercida por la parte actora.

**SEGUNDO.** Se declara la **NULIDAD LISA Y LLANA** de la Determinación de Situación Jurídica de Infractor con número de folio **28332**, emitida por el Juez Municipal adscrito a la Dirección de Justicia del Municipio de Aguascalientes, *tres de mayo de dos mil veinte*, y como consecuencia de ello, **hágase la devolución al actor** de las cantidades precisadas en el último considerando de esta sentencia.

**TERCERO.** Notifíquese personalmente.

Así lo resolvió esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de los Magistrados **ENRIQUE FRANCO MUÑOZ, RIGOBERTO ALONSO DELGADO y ALFONSO ROMÁN QUIROZ**, siendo ponente el *segundo* de los nombrados, quienes firman en unión de la Secretaria General de Acuerdos, Licenciada **María Hilda Salazar Magallanes**, que autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en lista de acuerdos del **quince de febrero de dos mil veintiuno**. Conste.





PODER JUDICIAL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO  
**JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO: 1016/2020**  
**SENTENCIA DEFINITIVA**

La Licenciada María Hilda Salazar Magallanes, Secretaria General de Acuerdos de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la sentencia o resolución **1016/2020** dictada en **doce de febrero de dos mil veintiuno** por la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, constante de **dieciséis** fojas útiles. Versión pública elaborada de conformidad a lo previsto por los artículos 3o fracciones XII y XXV; 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como del trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; se suprimieron: el nombre de las partes, el de sus representantes legales, sus domicilios, y demás datos generales, información que se considera legalmente como confidencial o reservada por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita, además de lo dispuesto por los artículos 1º, 2º fracción II, 3º, 11, 12 y 99 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Conste.